

Rancagua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, salvo el considerando quinto, el párrafo 3° del considerando sexto y los motivos séptimo a noveno, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, la demandante dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en autos, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, fundándose el recurso en que el juez a quo le otorgó valor probatorio a dos instrumentos privados emanados de terceros que no concurrieron al juicio a ratificarlos, siendo en base a éstos medios de prueba en virtud de los cuales se descartó la culpa de la demandada y con ello su responsabilidad en el daño producido a la actora.

Segundo: Que, al efecto, cabe precisar que los documentos acompañados a folio 51 por la parte demandada, efectivamente consisten en instrumentos privados otorgados por terceros que no concurrieron al juicio a ratificarlos, los que, en consecuencia, carecen de valor probatorio, por cuanto la posibilidad de tener por reconocido un instrumento privado en la hipótesis prevista en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, solo se refiere a los documentos emanados de la parte contra quien se presentan y de quien se pide tenerlos por reconocidos o auténticos.

En efecto, el informe de seguridad N° 18, aparece suscrito por Héctor Monsalve, jefe de turno de la empresa de seguridad que prestaba servicios para la demandada, quien no declaró como testigo en el juicio, por lo que, conforme lo razonado en el acápite anterior, tal documento no puede ponderarse en perjuicio de la parte contraria, sin que obste a ello el hecho de que en el mismo instrumento figure una firma sobre el título “cliente”, ya que ello no permite presumir que haya sido suscrito por la demandante y, en todo caso, en la resolución de 7 de febrero de 2019, no se le tuvo por acompañado bajo el



apercibimiento del artículo 346 N° 3 del código adjetivo, sino sólo con citación.

A su vez, el informe de prevención de riesgos ni siquiera se encuentra firmado por quien aparece otorgándolo, por lo que malamente puede otorgársele valor probatorio.

Tercero: Que, descartado entonces el valor probatorio de los referidos documentos, los dichos de los cuatro testigos de la demandante, cuyas declaraciones se consignan en el párrafo 2° del considerando sexto del fallo apelado, no aparecen controvertidos en autos y, en consecuencia, dado que se encuentran contestes en que el día del accidente, esto es, el 6 de febrero de 2015, el piso del sector del patio de comida del centro comercial de la demandada se encontraba húmedo o mojado y no existía señalética de advertencia, agregando incluso los dos últimos deponentes, haber visto a personal haciendo aseo en el lugar, es posible atribuirles el valor de plena prueba respecto a que el motivo o causa del accidente sufrido por la actora efectivamente fue que el piso se encontraba mojado, conforme al artículo 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Que, conforme a lo razonado, es posible dar por acreditado que el accidente sufrido por la demandante se produjo debido a la culpa o negligencia de la demandada, al no advertir a sus clientes, mediante alguna señalética, el riesgo de caídas producto de que el piso del sector del patio de comidas del centro comercial Plaza América se encontraba mojado, peligro que era claramente previsible para la demandada.

Quinto: Que, a raíz de dicha caída, ocurrida el 6 de febrero de 2015, la demandante sufrió la fractura del tercio medio de la rótula de rasgo transversal, de su pierna derecha, según consta en la documental de folio 49 y 56, en la que consta que fue atendida de urgencia en la Clínica Isamédica de Rancagua, luego fue evaluada por un médico traumatólogo el 9 de febrero de 2015 e intervenida quirúrgicamente en el mismo centro asistencial el 11 de febrero de 2015, mediante



osteosíntesis de rótula, inmovilización y posterior kinesiología, hasta mayo de 2015, en que se le dio el alta.

Sexto: Que, sentado lo anterior, resta por determinar si el demandante logró acreditar que haya sufrido perjuicios patrimoniales y morales a consecuencia del accidente de responsabilidad de la demandada.

Séptimo: Que, en primer término, la demandante pide que se le indemnicen por concepto de daño emergente, los gastos médicos en que incurrió para sanar de la lesión que le produjo el accidente sufrido y la correspondiente rehabilitación posterior, que avalúa en la suma de \$2.000.000 o, en subsidio, la sumas que se determine de acuerdo al mérito del proceso.

En segundo término, por concepto de lucro cesante, se demanda la suma que habría podido percibir por la demandante hasta los 60 años si no hubiese perdido su trabajo como funcionario de planta grado 17 de la Municipalidad de Rancagua, la que asciende a \$37.680.780, suma obtenida del promedio de sus últimas seis remuneraciones (\$628.013), considerando que al momento de ser “despedida”, tenía la edad de 55 años, restándole aún 5 años para poder jubilar, lo que hace una pérdida de 60 meses de sueldo.

En tercer lugar, en cuanto al daño moral, se demanda la suma de \$60.000.000, por el sufrimiento derivado los dolores pre y post operatorios que debió soportar, además de los miedos e incertidumbres sobre su futuro laboral.

Octavo: Que, en cuanto al daño emergente, con la documental de folio 57, referida a los programas médicos y boletas de honorarios por concepto de la atención de urgencia, intervención quirúrgica y tratamiento kinesiológico, se logró acreditar que la demandante debió pagar un total de \$1.128.415, por concepto de gastos médicos para tratar la lesión física sufrida a consecuencia del accidente, desembolso económico que debe ser reparado por la demandada.

Noveno: Que, en cuanto al lucro cesante, cabe precisar que de



los propios términos del Decreto Alcaldicio de 28 de mayo de 2015 que dispuso la desvinculación de la actora como funcionaria de la Municipalidad de Rancagua, que rola a folio 60, aparece que la vacancia en el cargo dispuesta por salud incompatible con el cargo, se basa en el hecho de que la demandante hizo uso de licencias médicas por 197 días entre el 20 de mayo de 2013 y el 20 de mayo de 2015, considerando al efecto periodos de licencias médicas que no derivan del accidente que es materia de esta causa, por lo que la pérdida de su cargo y de las remuneraciones asociadas no puede relacionarse de manera directa con el hecho dañoso del que es responsable la demandada, lo que impide acceder a la indemnización pedida por este rubro.

Décimo: Que, en cuanto al daño moral, cabe recordar que si bien la Corte Suprema ha sostenido que este tipo de perjuicio, en cuanto presupuesto para que se genere la responsabilidad civil, debe ser probado por quien lo reclama (CS 4.049-2009, CS 6.183-2009, CS 8.054-2009, CS 11.614-2011 y 25359-2014, entre otros), igualmente ha sostenido que cuando el menoscabo deriva de lesiones físicas sufridas por la víctima que demanda su reparación, el daño moral sería un hecho de normal ocurrencia, por lo que su existencia puede colegirse mediante presunciones y acorde al principio de normalidad, de las circunstancias en las que ocurre el hecho, de modo tal que si el daño moral se sigue del daño corporal es posible concluir que la víctima ha sufrido un daño de naturaleza no patrimonial que debe ser reparado (Así, por ejemplo, en la causa Rol C.S. 735-2015).

En este sentido, el profesor E. Barros B., expresa que “los atentados a la integridad física constituyen la causa más frecuente de daño moral. En verdad, las potencialidades de la vida contemporánea guardan una inevitable correlación con un aumento exponencial de los riesgos cotidianos. Puede afirmarse que el desarrollo del derecho de la responsabilidad civil en el último siglo se explica principalmente en razón del aumento de los daños corporales que se siguen de accidentes



laborales, del consumo y de la circulación” (Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Primera Edición, año 2013, pág. 319).

Luego el mismo autor explica que “el esquema de análisis más simple para calificar los daños morales derivados de un atentado a la integridad física distingue los males que el accidente positivamente provoca a la víctima (sus sufrimientos y aflicciones) y las eventuales privaciones del goce de ciertos bienes (la disminución de la capacidad de disfrutar de una buena vida). En el primer grupo, denominado usualmente *pretium doloris*, se incluyen los sufrimientos físicos y psíquicos que se siguen de una lesión corporal. En el segundo, denominado perjuicio de agrado, se incluyen las repercusiones extrapatrimoniales futuras que limitan la capacidad de la víctima para disfrutar de las ventajas de la vida (la dificultad para establecer una vida de relación, para desarrollar actividades de esparcimiento y cualesquiera otras semejantes)”, pero aclara que “a este respecto es necesaria una cierta objetividad, atendiendo a las expectativas de una persona que presenta las características más típicas de la víctima” (op. cit., pág. 320).

Undécimo: Que, en la especie, son hechos acreditados que la demandante, a consecuencia del accidente causado por culpa de la demandada, sufrió lesiones consistentes en fractura del tercio medio de la rótula de rasgo transversal, de su pierna derecha, la que debió ser intervenida quirúrgicamente y sometida a un posterior tratamiento de kinesiología que se prolongó hasta mayo del año 2015.

Conforme a lo anterior, la acreditación del daño moral surge como una consecuencia necesaria tanto de la existencia de lesión y su tratamiento como el periodo de incapacidad que aquélla produjo a la demandante, a lo que cabe agregar que no hay duda que el criterio de normalidad resulta plenamente funcional para presumir o estimar como hechos evidentes, aquellos presupuestos fácticos que surgen como una consecuencia común y ordinaria del devenir de ciertos sucesos, como



ocurre, según se ha dicho, con el dolor físico derivado de lesiones corporales.

Duodécimo: Que, sin embargo, no es posible incluir como parte del daño moral que debe ser indemnizado por la demandada, las restantes consecuencias psicológicas que arguye la actora y que se tradujeron en licencias médicas por depresión, por cuanto en el proceso no existe algún medio de prueba que permita vincular de manera directa dicha patología con las consecuencias del accidente.

Decimotercero: Que, finalmente, en cuanto a la avaluación del daño moral, este tribunal de alzada, reconociendo la dificultad que conlleva la determinación del monto indemnizatorio en un caso concreto, en razón de que este daño no es cuantificable en una suma de dinero, debido a su carácter incommensurable, estima que al momento de efectuar su regulación prudencial se deben considerar el resultado dañoso objetivo provocado, que se traduce en el sufrimiento físico y psicológico padecido por la demandante, por el hecho de sufrir lesiones de carácter graves, que lógicamente son de una recuperación física más compleja, máxime si tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente y sometidas a un posterior tratamiento kinesiológico, a lo que cabe agregar como parámetro los montos que se han otorgado por esta Corte en otros casos similares, como, por ejemplo, en la causa Rol 480-2017.

Decimocuarto: Que, por último, cabe desestimar la petición de la demandada de aplicar el artículo 2330 del Código Civil, por cuanto no se logró acreditar que la demandante se haya expuesto en forma imprudente al daño, dado que no se probó que haya realizada alguna acción u omisión que hubiese contribuido a aumentar las consecuencias del accidente, sin que pueda tener dicha aptitud el solo hecho de utilizar sandalias o chalas, como se sostiene en la contestación, pues resulta evidente que la causa de la caída fue que el piso estuviera mojado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 160, 186



y 426 del Código de Procedimiento Civil, **se revoca**, en lo apelado, la sentencia de catorce de enero de dos mil veinte, dictada por el Primer Juzgado Civil de Rancagua, en la causa Rol C-8443-2017, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, deducida por doña Lillian Marilúz Navarro Villarroel en contra de Centro Comercial Plaza América Spa y, en su lugar, se decide que **se acoge dicha demanda**, sólo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar a la actora, las sumas de \$1.128.415 a título de daño emergente y de \$4.000.000 por concepto de daño moral, las que se pagarán con los reajustes e intereses legales que se devenguen entre la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y la de su pago efectivo, **rechazándose** la demanda en lo relativo al lucro cesante, todo ello, sin costas, por no haber sido la demandada totalmente vencida.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Pedro Caro Romero.

Rol N° 368-2020 Civil.-

Resuelto por la **Segunda Sala** de esta Itma. Corte Apelaciones, integrada por los Ministros Sr. Pedro Caro Romero y Sr. Michel González Carvajal y abogado integrante Sra. María Latife Anich.

No firma la abogado integrante Sra. María Latife Anich, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no haber integrado el día de hoy.





JXJKJXXXRW

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Michel Anthony Gonzalez C. Rancagua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

